

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
DESPACHO 11

Magistrada Ponente: Ana Margoth Chamorro Benavides

Santiago de Cali, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintidós (2022).

AUTO No. 281

Radicación:	76001-23-31-000-2010-00966-01
Acción:	Nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante:	EMCALI EICE Representado por la abogada Olga Patricia Guzmán García T.P.83.580 notificaciones@emcali.com.co
Demandado:	Leonel Moreno Cobo
Sucesor procesal:	Martha Lucia Galeano Casanova Curador: Mauricio Londoño Uribe Correo: notificaciones@londonouribe.com
Procurador Designado:	Procurador Judicial II 18 SOLIS OVIDIO GUZMAN BURBANO soguzman@procuraduria.gov.co
Instancia:	Primera

AUTO SE ABSTIENE DE ABRIR EL PERIODO PROBATORIO Y CORRE
TRASLADO PARA ALEGATOS

EMCALI E.I.C.E pidió declarar la nulidad de la resolución No. 1215 del **13 de junio de 1995** que reconoció una pensión mensual de jubilación al señor Leonel Moreno Cobo. A título de restablecimiento solicitó el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas desde el reconocimiento hasta la ejecutoria de la sentencia, con sus respectivos intereses y ajustes monetarios.

Ante la imposibilidad de surtir la notificación personal o por aviso del accionado se ordenó a la parte actora realizar todas las gestiones necesarias para el emplazamiento del señor Leonel Moreno Cobo.

EMCALI cumplió la carga procesal impuesta y surtió la notificación por emplazamiento tal como dispone el artículo 108 CGP.

En providencia del 19 de abril del 2018, ante la no comparecencia de la persona emplazada al proceso, se designó curador ad-litem.

El abogado **Mauricio Londoño Uribe** se posesionó como curador ad-litem y contestó la demanda dentro de la oportunidad debida.

Inmediatamente solicitó la nulidad de lo actuado porque no se notificó a los herederos determinados e indeterminados del señor Leonel Moreno Cobo, quien falleció el 6 de septiembre del 2009, esto es, previo a la interposición de la demanda.

También pidió vincular como litisconsorte necesario a Colpensiones, porque desde diciembre del 2008 esta entidad le reconoció pensión de vejez al accionado.

Dijo que la entidad se negó a informar la existencia de sustitutos pensionales del accionado retirado por fallecimiento, explicando que se trata de información reservada conforme a lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.

Mediante auto del 14 de septiembre de 2021 el Despacho negó la nulidad y ordenó a Colpensiones informar la existencia de sustitutos pensionales.

Mediante auto No. 345 del 09 de noviembre de 2021 se dispuso tener como sucesora procesal del señor Leonel Moreno Cobo a la señora **Martha Lucia Galeano Casanova** y, por tanto, se impuso al apoderado judicial de la parte actora el deber de colaboración para surtir su debida notificación conforme el artículo 291 o 108 del CGP de ser procedente.

Mediante memorial del 10 de febrero de 2022 la apoderada de la parte actora manifestó que remitió la notificación a la dirección ordenada, pero que fue devuelta con anotación “*predio desocupado*”. Agregó que desconoce otra dirección en la que pueda realizar la notificación, por lo que solicitó ordenar el emplazamiento conforme al artículo 293 del C.G.P.

Mediante auto del 28 de febrero de 2022 se ordenó a la secretaría de esta Corporación realizar el emplazamiento de la demandada Martha Lucia Galeano Casanova identificada con cedula de ciudadanía No. 31.695.034.

La Secretaría realizó el emplazamiento en el registro único de emplazados el 19 de abril de 2022 (ADF 83 Samai), sin que a la fecha de esta providencia la demandada se haya presentado al proceso.

Mediante auto del 18 de julio de 2022 se designó al abogado Mauricio Londoño Uribe como curador ad litem de la señora Martha Lucia Galeano Casanova.

En memorial del 18 de agosto de 2022 el curador contestó la demanda.

- **Pruebas.**

El artículo 209 del CCA dispone “*Vencido el término de fijación en lista, se abrirá a pruebas si la controversia o litigio **no es de puro derecho, siempre que las partes las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio.***”

La entidad demandante, en el escrito contentivo de la demanda (fl. 79-98) solicitó tener como pruebas las documentales aportadas.

Por su parte, el curado ad- litem solicitó el interrogatorio de parte del representante legal de la entidad.

Al respecto, el artículo 195 del C.G.P. establece:

“ARTÍCULO 195. DECLARACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.

Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv).”

Conforme la norma citada, no valdrá la confesión de los representantes legales de las entidades públicas, por tanto, la prueba es ilegal.

Así las cosas, al no haber pruebas por decretar y sin que se advierta la necesidad de decretar pruebas de oficio, el Despacho se abstendrá de abrir a pruebas el proceso.

- **Traslado para presentar alegatos de conclusión.**

Conforme a lo establecido en los artículos 210 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 59 de la Ley 446 de 1998, el Despacho ordenará correr en Secretaría el término para alegar de conclusión por diez (10) días, oportunidad dentro de la cual el agente del Ministerio Público podrá solicitar traslado especial para rendir concepto, el cual se concederá sin necesidad de auto por el término de diez (10) días contados a partir de la entrega del expediente, el cual se efectuará una vez concluido el traslado común.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Despacho 11 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO: TENER como pruebas al momento de fallar cada uno de los documentos efectivamente aportados con la demanda

SEGUNDO: ABSTENERSE de abrir a pruebas el proceso por no existir pruebas por practicar.

TERCERO: ORDENAR correr traslado a las partes por el término de diez (10) días hábiles para alegar de conclusión, de manera subsecuente al Ministerio Público, como lo establece el artículo 210 del CCA.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por estados electrónicos, como autoriza el artículo 9 del DL 806 de 2020.

Esta decisión fue suscrita electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co/> en donde se puede corroborar su autenticidad.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada

cmj